

Segunda Sesión

LA ACCIÓN MULTILATERAL EN IBEROAMÉRICA FRENTE A LA COVID-19

La Fundación Carolina, junto con Oxfam Intermón, celebró el 22 de abril el webinar: “La acción multilateral en Iberoamérica frente a la COVID-19”. La sesión estuvo moderada por la secretaria de Estado de Asuntos Exteriores y para Iberoamérica y el Caribe, Cristina Gallach, y contó con la participación de Sebastián Nieto-Parra, jefe de la Unidad de América Latina y el Caribe del Centro de Desarrollo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); Pablo Nemiña, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina; Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas (CEPAL), y Andrea Costafreda, directora de programas de Oxfam Intermón.

La respuesta financiera

El debate se inició con la valoración de las acciones de las instituciones internacionales ante la crisis generada por la pandemia. Sebastián Nieto-Parra resaltó el papel analítico de organismos como la CEPAL o la OCDE, que dan seguimiento a las políticas públicas activadas por gobiernos de distintas regiones del mundo, y sugieren recomendaciones encaminadas a una mayor cooperación multilateral. Concretamente, la OCDE ha puesto en marcha un “Country Policy Tracker” (disponible en: <http://www.oecd.org/coronavirus/es>), donde se analizan y comparan las iniciativas de 90 países, incluyendo a 14 de la región. Además, recuperando la ambición del Plan Marshall, su secretario general, Ángel Gurría, ha propuesto una respuesta global, en la que todos los países habrían de contribuir con la misma voz para idear medidas económicas, políticas y sociales de forma coordinada. El objetivo es generar recursos que atiendan la urgencia de la crisis, pero que también transformen, a medio plazo, los modelos de desarrollo y productivos. Sebastián Nieto-Parra asimismo ponderó las ayudas financieras del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que, aun siendo de momento insuficientes, ofrecen señales sobre las que podrían avanzar en los próximos meses.



Hay que generar recursos para atender la urgencia de la crisis, pero también para transformar los modelos de desarrollo y productivos

A este respecto, Pablo Nemiña trasladó una visión más crítica, dada la falta de concreción de muchas propuestas. Examinando en particular el papel del FMI, como institución que más recursos podría movilizar, identificó tres problemas. En primer lugar, el Fondo tan solo puede prestar ayuda por medio de programas clásicos de ajuste, acuerdos *stand-by* o acuerdos de convenios estructurales de facilidades ampliadas. No obstante, estos mecanismos no son aplicables habida cuenta de la elevada incertidumbre en torno a la evolución de la crisis, la cual impide predecir cuándo podría devolverse la deuda. El segundo problema estriba en que sus programas de emergencia, como el *Rapid Financing Instrument*, carecen de fondos suficientes, aparte de que algunos países con economías avanzadas, como Estados Unidos, se muestran renuentes a aportar financiación. Por último, el FMI podría crear liquidez a través de la emisión de derechos especiales de giro (DEG), pero de nuevo Estados Unidos —único país con capacidad individual de veto en ese organismo— ha bloqueado esta vía, a la que también se ha opuesto India. En consecuencia, o bien existen fondos sin mecanismos adecuados; o bien existen mecanismos sin fondos suficientes. En este escenario, la única noticia alentadora radica en que la institución ha recogido la propuesta del G20 de moratoria del pago de deuda de los países de bajos ingresos hasta final del año 2020.

Hacia una reforma del multilateralismo

Desde un punto de vista general, Alicia Bárcena se refirió a la necesidad de reformar el funcionamiento de las instituciones internacionales hacia un nuevo multilateralismo. Hay que partir de dos constataciones: la arquitectura actual se ha revelado insuficiente y las soluciones del pasado no bastan. Así, en las negociaciones del G20 se aprecia que los intereses de los gobiernos operan en clave interna, nacional. Además, las iniciativas que secunda el FMI —como la citada postergación del pago de deudas— no solo desatienden a los países de ingresos medios, sino que continúan acordándose bilateralmente, lo que resulta especialmente lesivo para regiones como África o América Latina. Se requiere, pues, una multilateralidad distinta, que afronte los retos de la pandemia —y la

defensa de los bienes públicos globales— con un enfoque multidimensional, que interconecte cuestiones sanitarias, financieras, medioambientales o de género.

De acuerdo con Alicia Bárcena, cabe plantear la reforma contando con los organismos existentes, de modo que lideren el proceso. El papel que pueden jugar tanto Naciones Unidas como la Organización Mundial del Comercio en favor de una cooperación científica más fluida resulta clave. Igualmente, lo es la labor de estudio y prevención que realizan centros como la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO), o la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La primera ya ha elaborado un informe sobre las millones de personas que van a padecer hambre por efecto de la pandemia; por su parte, la OIT ha proyectado asimismo la cifra de desempleados que puede generar.

En el ámbito regional, se hace ineludible contar con el concurso de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) o la CEPAL, y apoyar más decididamente el trabajo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En este sentido, México —que asumió su presidencia pro tempore en enero de 2020— está desempeñando un rol proactivo, y ha llevado a Naciones Unidas una propuesta para que todos los países puedan acceder de forma gratuita y universal a medicamentos y equipos médicos. Por último, subrayó Bárcena, es cada vez más importante que la multilateralidad incorpore la voz crítica y los aportes de las instituciones de la sociedad civil.



Es precisa una multilateralidad distinta, que afronte la defensa de los bienes públicos globales con un enfoque multidimensional

La dimensión social

La directora de programas de Oxfam Intermón, Andrea Costafreda, coincidió en la necesidad de intensificar la acción de la comunidad internacional, bajo un enfoque que —al contrario que en la crisis de 2008— se centre en las personas y en la defensa de los derechos humanos. Junto al mayor esfuerzo financiero que corresponde a las instituciones multilaterales, insistió en enmarcar la salida de la crisis en el horizonte trazado por la Agenda 2030. Tomando como referencia el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 17, se trata de renovar el contrato social entre la ciudadanía, los gobiernos y el mercado toda vez que, si no se plantea una

respuesta global que llegue a todos, la desafección hacia las instituciones va a continuar agudizándose. Por ello, en los planes de salida post-pandemia, la cooperación al desarrollo ha de cobrar mayor relevancia, en un doble sentido: por un lado, deben incrementarse los flujos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD), una palanca que sigue siendo indispensable, pero que en 2019 tan solo creció un 1,4%, mientras que la ayuda humanitaria decrecía un 3%. Por otro, se ha de conceder más atención a los países de renta media, en los que no paran de aumentar las desigualdades y la vulnerabilidad de las clases medias.



Se trata de renovar el contrato social entre la ciudadanía, los gobiernos y el mercado y evitar la desafección hacia las instituciones

En esta línea, Sebastián Nieto-Parra apuntó que estos países necesitan una cooperación readaptada, que respalde políticas canalizadas hacia sus verdaderas necesidades. No puede olvidarse que, en los últimos años, la región registra índices de crecimiento exiguos y un fuerte incremento de la conflictividad social, fruto de las demandas insatisfechas. En este contexto, resulta imperativo impulsar medidas de protección social que reduzcan la informalidad laboral que perdura en la región. Esta situación, que de por sí implica que estos/as trabajadores/as puedan recaer en la pobreza, ya ha golpeado a millones de personas por efecto de la pandemia. Sin embargo, cabe aprovechar la crisis para promover nuevos modelos productivos, y construir sistemas tributarios más efectivos, que superan las reducidas tasas de recaudación —en torno al 23% del PIB— en las que aún se mueve América Latina. Simultáneamente, este planteamiento ha de ir acompañado de un proceso de perfeccionamiento de las administraciones públicas y del fortalecimiento de la cooperación tecnológica y el intercambio de conocimientos.

Alicia Bárcena también incidió en esta perspectiva social, que ha de apoyar a las pymes, reducir la brecha digital y, ante todo, proteger los ingresos de las familias más vulnerables. En este punto, la implantación de una renta básica ciudadana, aun de forma temporal, sobresale como una medida idónea. Su coste, de acuerdo con las estimaciones de la CEPAL, sería viable en un intervalo de tres meses, en tanto implicaría un gasto del 4,7% del PIB (tanto más al tener en cuenta que la evasión fiscal supone el 6,3% del PIB). Para ello, se precisaría de un pacto fiscal

que articulesse sistemas tributarios más justos y combatiese la existencia de paraísos fiscales.

Andrea Costrafeda profundizó en este aspecto, recordando que el 50% de los impuestos en la región se aplican sobre el consumo. Lo recomendable sería transitar hacia estructuras fiscales que gravasen más sobre rentas y propiedades. Igualmente, en lugar de prolongar o ahondar los privilegios fiscales que disfrutaban las grandes empresas (vía exenciones), urge apoyar a las pymes, que son las que generan el 67% del empleo en América Latina. Asimismo, Sebastián Nieto-Parra instó a impulsar una acción internacional más enérgica en la lucha contra la evasión fiscal. Y es que, según el proyecto de la OCDE que estudia la “erosión de la base imponible y traslado de beneficios” que planifican las empresas para eludir impuestos (BEPS, por sus siglas en inglés) esta oscila entre los 100.000 y 200.000 millones de euros al año (proyecto disponible en: <https://www.oecd.org/tax/beps/>).

Sin abandonar el terreno social, los/as panelistas señalaron que el enfoque de género resulta crucial en el diseño de toda estrategia post-pandemia. La crisis ya ha impactado diferenciadamente sobre las mujeres, quienes a escala global concentran el 70% de los empleos del sector salud que trabaja “en primera línea”. Al mismo tiempo, el 75% del trabajo de los cuidados recae sobre ellas y, además, se encuentran más expuestas a retornar a la pobreza puesto que representan el 60% de la economía informal. Mientras tanto, el confinamiento ha obligado a víctimas de violencia de género a convivir con su agresor. Todo esto hace imprescindible una respuesta multilateral como la que, según anunció Cristina Gallach, está preparando el Gobierno de España ante Naciones Unidas, para que su plan de salida incorpore esta perspectiva de género.



El Gobierno de España está promoviendo una resolución ante Naciones Unidas para que la salida de la crisis incorpore el enfoque de género

La nueva geografía económica

En el debate final, suscitado por las preguntas del público, se abordó la recomposición que va a experimentar la geografía de la economía. Se vislumbra una relativa desglobalización —que ya se venía produciendo en el último lustro— que va a dar a paso a un mundo más regionalizado, donde la producción se va a

reubicar en lugares más cercanos a los mercados de consumo. Esto puede ser aprovechado por América Latina para relocalizar sus cadenas de valor y, en última instancia, reforzar su integración regional.

Según Alicia Bárcena, las tres grandes fábricas del mundo estarán en Europa, América del Norte y Asia. Ante este escenario, la región no puede estancarse en una situación de dependencia (sobre todo respecto de Estados Unidos) y tiene que protegerse frente a futuras perturbaciones externas. Debe, pues, hacer viables nuevas industrias, basadas en la automatización y la digitalización, y fomentar redes de producción y de investigación tecnológica. Para ello cuenta con países, como México, Brasil o Argentina, capaces liderar este proceso, pero es a su vez indispensable acordar políticas de cooperación desde las que establecer estrategias sectoriales, detectar ventajas comparativas y concertar, como se apuntó, medidas fiscales o macroeconómicas, que también contribuyan a mantener los recursos en el interior de los países. Se deben evitar casos como el de Argentina, donde mientras se recibían préstamos del FMI por valor de 50.000 millones de dólares, se producían en paralelo enormes salidas de capitales.



La economía internacional va a regionalizarse, y la producción se reubicará en lugares más cercanos a los mercados de consumo

En suma, la reconfiguración de la economía mundial impondrá esquemas de acción locales y regionales, pero ello debe combinarse con un pensamiento global especialmente atento a los desafíos del cambio climático, las migraciones o la disrupción digital. Solo así podrá encauzarse una salida de la crisis —que interpela a todos los países— orientada a la transformación del modelo de desarrollo.

Relatoría redactada por José Andrés Fernández Leost



Video de la sesión

<https://www.youtube.com/watch?v=3Gf4s4MGmzA>